



COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Organización de los Estados Americanos

PARTE I

ALGUNAS NORMAS CONSTITUCIONALES, LEGALES O ADMINISTRATIVAS Y DECISIONES JUDICIALES QUE IMPORTAN PROGRESOS EN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS POR LA DECLARACIÓN AMERICANA

En el curso de los dos años a que se refiere este Informe, en varios países americanos se han dictado nuevas disposiciones constitucionales, legales o administrativas y decisiones judiciales que han importado progresos evidentes en el esfuerzo por desarrollar y proteger los derechos humanos reconocidos por la Declaración de Bogotá.

Nos referimos solamente a algunas de ellas, las que la Comisión ha podido reunir para ser incorporadas a este Informe, habiéndose seleccionado solamente las que tienen directa relación con esta materia. Toda disposición que haya tenido por efecto aumentar los créditos presupuestales para perfeccionar los servicios de educación, de vivienda, de salud pública, de comunicaciones, etc., así como toda nueva ley destinada a mejorar el sistema de tenencia o manejo de la tierra, indirectamente han contribuido a la causa de los derechos humanos, y son muchísimas las normas de este carácter que casi todos nuestros Estados han sancionado en los dos últimos años. Su mención haría extremadamente extenso este Documento, y es por ello que nos hemos contraído a la cita de las normas que, específicamente, tratan del reconocimiento o de la protección de estos derechos.

Hemos preferido clasificarlas de acuerdo con el derecho al cual ellas se relacionan más directamente.

Aludiremos a continuación a algunos textos que importan la regulación de derechos fundamentales por medio de simples decretos. La Comisión estima que lo deseable es que, dada la enorme importancia de esta materia, su regulación se efectúe por medio de leyes. No obstante, no puede negar el carácter progresivo de disposiciones contenidas en decretos cuando ellas vienen a sustituir a decretos anteriores menos favorables al desarrollo de los derechos humanos, o cuando tales decretos han sido dictados en países en los cuales, por haberse suspendido la vigencia del orden constitucional y disuelto el órgano parlamentario, la función legislativa se cumple a través de actos del Poder Ejecutivo.

1. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas

Chile, mediante la Ley Nº 17.266, de 22 de diciembre de 1969, introdujo varias reformas en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar. Las reformas alcanzan también a las penas carcelarias y a las penas accesorias aplicables a varios delitos. En cuanto al Código Penal, se suprime del Artículo 21 la pena accesoria de "cadena o grillete". En el Artículo 66 se atenúa la imposición de pena de muerte, al agregarse que, en tales casos, "el Tribunal no estará obligado a imponerla necesariamente". Otro tanto se hace con el Artículo 68. El Artículo 75 queda modificado al sustituirse la pena de muerte por la de "presidio perpetuo". Los Artículos 86 y 87 son reemplazados por textos más precisos y beneficiosos para los reos, en atención a su edad o sexo. En el Artículo 90 se suprime la pena accesoria de "cadena o grillete". La modificación del Artículo 91 ofrece la alternativa de celda solitaria o aislamiento,

en vez de pena de muerte, para los que, hallándose cumpliendo pena de presidio perpetuo, cometen delitos cuyas penas correspondientes sean similares a las que se hallan cumpliendo. El Artículo 106 es modificado en el sentido de atenuar la aplicación de la pena de muerte en los delitos de conspiración contra la seguridad exterior de la nación. La modificación del Artículo 107 atenúa la pena de presidio. Otro tanto ocurre con las modificaciones de los Artículos 108, 109, 140, 331, 390 y 391, en virtud de las cuales se atenúan las aplicaciones de las penas de muerte y de prisión perpetua. En cuanto a los Artículos del Código de Justicia Militar, números 244, 245, 252, 262, 270, 272, 275, 281, 282, 287, 288, 300, 301, 304, 305, 330, 331, 337, 339, 341, 350, 379, 383, 384 y 391, las modificaciones y supresiones de los mismos, establecidas en esta Ley, van encaminadas a suavizar o atenuar el rigor de las penas, una vez eliminado la pena de muerte, otras con la alternativa de pena carcelaria y dentro de ésta con mayor o menor grado de rigor.

Colombia, por Decreto N° 1355, de 4 de agosto de 1970, dictó normas de policía para todo el territorio nacional. En las disposiciones de este Decreto aparecen conceptos que definen la función encargada al cuerpo de policía, que es la de "proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el Reglamento de Policía y en los principios universales del derecho" (Artículo I). El Artículo 2º delimita la competencia de la policía, que es la de la "conservación del orden público interno", esclareciendo que a la policía no le corresponde "remover la causa de la perturbación" de ese orden. En el Artículo 4º se expresa que "en ningún caso la policía podrá emplear medios incompatibles con los principios humanitarios". En el Artículo 6º se afirma que "ninguna actividad de la policía puede contrariar a quien ejerza su derecho sino a quien abuse de él".

2. Derecho de igualdad ante la ley

Ecuador, por Decreto N° 177-C, de 31 de julio de 1970, establece, como día de la lucha contra la discriminación racial, el 1ro. de septiembre de cada año, inspirándose en la Resolución 2545 (XXIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se dispone que, en esa fecha, se deberán dictar conferencias sobre dicho tema en los institutos de Educación y centros militares.

Estados Unidos de América, por la Ley de Vivienda, ampliada en 1969, declaró ilegal toda expresión verbal o escrita, que indique preferencia racial o religiosa con respecto a la venta o alquiler de vivienda. Al amparo de esta ley, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició 25 demandas en 1969, contra alegadas discriminaciones raciales en alquiler de viviendas por parte de administradores, corredores de bienes raíces, promotores de zonas de recreación y autoridades en el campo de la vivienda. De acuerdo con el Título II de la Ley de Derechos Civiles, de 1964, el Gobierno de los Estados Unidos inició 45 demandas contra restaurantes, estaciones de servicio, hoteles y lugares de alojamiento público, para terminar con la discriminación. En el propio año 1969 acordaron voluntariamente cumplir con lo dispuesto en esta ley 47 dueños de empresas similares a éstas. También en este campo de la no discriminación racial se produjo variada jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 1969, en el caso Daniel v. Paul (395 US 298) la Corte Suprema dictaminó que un Club de Little Rock, Arkansas, patrocinado por personas de la raza blanca, debe admitir a personas de color por tratarse de un sitio público, cuyas operaciones afectaban el comercio, al amparo de la Ley de Derechos Civiles de 1969. En 1970 la propia Corte se pronunció en materia de discriminación racial al decidir en el caso Adickes v. S.H. Kress & Co. (90 S.G. 1598). Al amparo de la Enmienda XIV de la Constitución, la Corte declaró que la negativa de un restaurante de dar servicio a una mujer blanca por encontrarse en compañía de personas de color, constituía una violación de las disposiciones sobre Lugares Públicos (Ley sobre Derechos Civiles, 1964). Cabe observar, además, que en 1969 el Gobierno de los Estados Unidos inició 57 demandas contra las Juntas de Educación de diversos Estados del país, con el fin de que hicieran cumplir la integración racial de las escuelas públicas bajo sus respectivas jurisdicciones. En demanda planteada ante el Distrito Judicial de Atlanta el 1ro. de agosto de

1969, se solicitó que la Junta de Educación estatal empleara su autoridad para poner fin al sistema de dobles colegios (para blancos y para negros) en 80 distritos escolares del Estado de Georgia. Esta demanda prosperó, y el 17 de diciembre, la Corte ordenó la integración de los 80 distritos, en conformidad con el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Asimismo se dispuso, mediante dicha orden, que el Estado de Georgia suspendiera el pago de fondos a los distritos escolares que no cumplan con esa disposición judicial. Se estableció, además, que los planes de segregación se completaran para el 1ro. de mayo de 1970, y se pusieran en vigor el 1ro. de septiembre de 1970. En octubre 29 de 1969 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en un caso que comprendía varios distritos escolares de Mississippi --Alexander v. Board of Education (396 US 19)—declaró que la doctrina de “rapidez deliberada” no era permisible constitucionalmente, y sostuvo que “era obligación de cada distrito escolar terminar de inmediato con el sistema dual de educación, y poner en funcionamiento, desde ahora en adelante, un sistema único de escuelas”. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por su parte, inició en 1969 dieciséis demandas por discriminación en el trabajo, de las cuales 13 demandas se plantearon al amparo del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Algunas de estas demandas se iniciaron contra empresarios privados, y otras contra sindicatos de trabajadores. En las primeras se alegaba discriminación racial en las prácticas de contratación de mano de obra o de promoción y ascenso en el empleo. En las segundas se alegaba discriminación, al existir sindicatos para trabajadores negros y para trabajadores blancos, y al asignarse ciertos trabajos de acuerdo con la raza de la persona que lo realizaba. Por Orden Ejecutiva de 12 de agosto de 1969, el Gobierno de los Estados Unidos fortaleció su política de facilitar igual oportunidad en los empleos del Gobierno federal sobre la base del mérito y la capacidad, sin discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Dicha Orden Ejecutiva procura el establecimiento de programas positivos en cada departamento o rama ejecutiva bajo la orientación de la Comisión de Servicio Civil.

3. Derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión

Panamá, el 31 de octubre de 1969, y Perú, el 30 de diciembre del mismo año, dictan nuevas normas sobre la prensa y el ejercicio de la libertad de expresión. Prescindiendo de otros aspectos de dichos Documentos que podrían provocar otros comentarios, se señala que ambos consagran el derecho de rectificación y respuesta, considerado como una necesaria limitación al derecho de libertad de expresión, instituida en protección de otros derechos humanos igualmente importantes.

Estados Unidos de América ha afirmado algunos criterios jurisprudenciales en relación a esta materia. Así, la Corte Suprema, en el caso Stanley v. Georgia (394 US 557), ha declarado que la Corte Suprema declaró “si la Primera Enmienda significa algo, ella quiere decir que el Estado no tiene derecho a decirle a una persona, sentada sola en su casa, qué libros puede leer o qué películas puede ver. Nuestra herencia constitucional se rebela ante la idea de dar autoridad al gobierno para controlar la mente humana”. En el caso Brandenburg v. Ohio (395 US 444), la Corte Suprema declaró que es inconstitucional que un Estado prohíba abogar por el empleo de la fuerza o por la desobediencia de la ley como medio para obtener reformas en el plano industrial o político, si tal proclamación no está directamente encaminada a incitar o producir una acción ilegal. En el caso de Bachellar v. Maryland (90 S.G. 1312, 1970), la Corte declaró que la expresión pública de ideas no puede prohibirse meramente porque las ideas sean ofensivas al oído de otros, o simplemente porque los transeúntes objetan las demostraciones pacíficas y ordenadas.

4. Derecho de residencia y tránsito

Colombia, por el Decreto N° 1355, de 4 de agosto de 1970, estableció normas de policía para regir en todo su territorio. El Artículo 96 de dicho Decreto consagra el principio de libre tránsito y destaca que el mismo está permitido en el país sin necesidad de autorización, advirtiéndose que el tránsito terrestre podrá ser objeto de reglamentos nacionales y locales (Artículo 100), sin que dichos reglamentos puedan estatuir otras limitaciones que las orientadas a “garantizar la seguridad y la salubridad públicas” (Artículo 99). El Capítulo II del

Decreto establece normas sobre libertad de residencia, la cual se otorga a todos los habitantes del territorio nacional (Artículo 101).

5. Derecho a la inviolabilidad del domicilio

Estados Unidos de América, a través de la Corte Suprema, se ha pronunciado en varios casos relativos a esta materia. La Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunció, en 1969, en el caso Spinelli v. United States (393 US 410), referente a la validez constitucional de los registros y allanamientos. De acuerdo con la 4ta. Enmienda de la Constitución, no se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y pertenencias contra registros y allanamientos irrazonables. La Enmienda, además, dispone que no se expedirán mandamientos sino en virtud de "causa probable...". En un caso famoso, decidido en 1964 Aguilar v. Texas (378 US 108), la Corte Suprema estableció normas con arreglo a las cuales debe apreciarse el requisito constitucional de "causa probable". Respecto del caso Spinelli, la Corte examinó los méritos del mandamiento expedido por un magistrado para registrar el apartamento del señor Spinelli, en busca de prueba sobre actividades interestatales en juegos de apuesta. El mandamiento que autorizaba el registro había sido expedido teniendo como fundamento principal la información de un delator. La Corte, aplicando las normas establecidas en el caso Aguilar, determinó que la información no era suficiente como fundamento para el descubrimiento de la "causa probable" de una actividad delictiva. No existía prueba adicional de que el delator o informante fuera persona digna de crédito, ni existía relación suficiente entre las circunstancias que sirvieron de base al delator para alegar la probable actividad delictiva. Tampoco se suministró prueba corroborante de importancia. En su decisión, la Corte declaró no poder respaldar este mandamiento sin mermar con ello importantes disposiciones que garantizan que el criterio de un funcionario judicial imparcial se interpondrá entre la policía y el ciudadano. Otro caso que hace referencia al derecho a la seguridad de las personas, consagrado en la 4ta. Enmienda de la Constitución, fue el de Davis v. Mississippi (393 US 721), también resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos. En este caso el máximo tribunal norteamericano aplicó la regla de que toda prueba obtenida mediante registros y allanamientos en violación de la Constitución, es inadmisibles en una Corte estatal. El acusado, en este caso, había sido arrestado por agentes policiales desprovistos de mandamiento judicial. Tampoco existía fundamento de "causa probable" para el arresto.

6. Derecho al trabajo y a una justa retribución

Brasil, por Ley Nº 5584, de 26 de junio de 1970, consolida las leyes del trabajo y presta asistencia jurídica al trabajador. Asimismo, se consigna en dicha Ley (Artículo 10) que todo empleado "no existiendo plazo estipulado para la terminación de su respectivo contrato, y cuando no haya dado motivo para cesantía, [tiene asegurado] el derecho de una indemnización, pagadera a base de la mayor remuneración que venía percibiendo en la misma empresa".

México, por Ley publicada el 1ro. de abril de 1970, incorpora nuevas disposiciones protectoras de los derechos de los trabajadores. En el Artículo 3º, párrafo 1º de la Ley, se establece la exigencia del respeto para las libertades y dignidad del trabajador, quien debe desempeñar el trabajo en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel decoroso para él y para su familia. En el párrafo 2º del propio Artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo se establece el principio de que no podrán hacerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social lo que consagra en esta materia específica el respeto al derecho de igualdad. En el Artículo 5º se dice que las disposiciones de la nueva Ley son de orden público y por lo tanto no produce efecto legal alguno la estipulación que los particulares establezcan respecto del trabajo para niños menores de 14 años, de jornadas mayores que las legalmente permitidas, de jornadas inhumanas, de horas extraordinarias de trabajo para mujeres y para menores de 16 años, de obtención de un salario inferior al mínimo o de renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas de trabajo. Se establece el descanso obligatorio debidamente remunerado, tal como es de verse en el Artículo 69 de la Ley.

7. Derecho de justicia

Argentina, por Ley Nº 18.670, de 21 de abril de 1970, estableció nuevas normas en materia procesal penal, algunas de las cuales significan un progreso para la protección de los derechos humanos. Así, por ejemplo, la ley tiende a “implantar gradualmente la oralidad en los procesos penales por sus reconocidas ventajas de eficacia, celeridad y publicidad”. La oralidad del debate es obligatoria en virtud del Artículo 26 de esta ley; y su publicidad queda consagrada en el Artículo 28 de la misma.

La Ley Nº 2.903, sancionada por la Provincia de Corrientes, en Argentina, instituye la Acción de Amparo “contra todo acto u omisión de órgano o agente de la administración pública que, actual o inmediatamente altere, amenace, lesione o restrinja con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, cualquiera de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, con excepción de la libertad individual” (Artículo I). Expone el Artículo 2º de esta ley que no procederá dicha acción cuando existan recursos judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate (párrafo a). En cuanto a la restricción de la libertad individual (párrafo c) expone dicho Artículo que no procederá la Acción de Amparo cuando corresponda la interposición del recurso de Habeas Corpus. Si el acto impugnado emanare de un órgano del Poder Judicial (Artículo 2º, párrafo b) o de una autoridad nacional --ya fueren actos u omisiones (Artículo 3º), se denegará el trámite del pedido de amparo. La sentencia a que de lugar la Acción de Amparo se limitará a declarar “que se ha probado sumariamente la existencia de un derecho cierto y exigible y de un acto que lo lesiona con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y ordenará los medios oportunos para proteger a aquél (Artículo 12).

Colombia ha codificado las normas sobre Procedimiento Criminal por Decreto Nº 1345, de 4 de agosto de 1970. En las normas generales, bajo el título I, se sientan una serie de principios jurídicos que constituyen la base de sustentación de todo el derecho procesal codificado. En el Artículo I de esas normas se recoge el principio de legalidad del proceso, o sea, se consagra el principio de que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se impute, ante juez competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada proceso. El Artículo 3º expone la garantía de ciertos derechos individuales, al afirmar que nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en las leyes. El Artículo 6º recoge el principio de favorabilidad, que aplica la ley permisiva o favorable, de preferencia a la restrictiva o desfavorable, en todas las materias relacionadas con el procedimiento penal. El Decreto comprende 800 artículos y dispone su entrada en vigencia el 1ro. de enero de 1971.

Panamá, por Decreto de Gabinete Nº 341, del 31 de octubre de 1969, restableció la vigencia de algunas disposiciones constitucionales, que habían sido suspendidas el 7 de noviembre de 1968. De acuerdo con este Decreto, se restablece la vigencia de los Artículos 22, 24, 26, 27, 29, 38 y 51 de la Constitución Nacional. Dichos Artículos comprenden, respectivamente, el derecho de protección contra detención arbitraria (22); el derecho de recurso de habeas corpus (24); el derecho a la inviolabilidad del domicilio (26); el derecho de residencia y tránsito (27); el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia (29); el derecho de expresión (38) y el derecho de petición (51). En cuanto al Artículo 39, que consagra el derecho de reunión, su restablecimiento no incluye a las ciudades de Panamá y Colón.

Estados Unidos de América, por Ley Nº 91-447, de 14 de octubre de 1970, autoriza a las Cortes de Distrito a proveer de defensor a aquellas personas que, por su situación económica, no puedan contratar los servicios de un abogado, cuando ellas se encuentren en alguno de los casos siguientes:

1. Imputadas por delito o falta, o acto de delincuencia juvenil que si fuera cometido por un adulto equivaldría a delito o falta, o violación de la libertad a prueba.

2. Personas bajo arresto, cuando la designación de un letrado sea exigida por la ley.
3. Personas sujetas a revocación de libertad condicional, en custodia como testigo presencial o como parte en una acción incidental.
4. Cuando el amparo de la Enmienda Sexta de la Constitución se exige la designación de letrado, o para quien, ante el peligro de perder la libertad, en virtud de la ley federal es preceptiva la designación de asesor.

El asesoramiento contemplado en cada programa deberá incluir consejo y servicio de investigación, peritaje y otros servicios necesarios para una adecuada defensa. También se dispone sobre este derecho en la Ley Nº 91.358, de 29 de julio de 1970, aplicable al Distrito de Columbia exclusivamente, que establece que todo menor al que se le impute la comisión de algún delito, o que necesite supervisión, tiene derecho a que se le designe un letrado que lo asesore en todas las etapas importantes del proceso, inclusive en el momento de admitir o negar los cargos en la etapa inicial y en cualquier otra etapa del proceso. Si el acusado no puede sufragar dicho servicio legal, deberá prestársele el mismo con carácter gratuito.

8. Derecho de sufragio y de participación en el gobierno

México, por reforma del Artículo 34 de su Constitución Política, con fecha 22 de diciembre de 1969 ha ampliado el número de las personas dotadas de la calidad de ciudadano, al incorporar a la ciudadanía activa a los menores de 21 años y mayores de 18. Las consecuencias de estas modificaciones al texto constitucional mexicano se traducen en el ejercicio de las prerrogativas que, como correspondientes al ciudadano, contempla el Artículo 35 de la Constitución Política del país, como son las de votar en las elecciones populares, el ejercicio del derecho de asociación para tratar de los asuntos políticos del país y el ejercicio, en toda clase de negocios, del derecho de petición.

Estados Unidos de América, por la Ley Nº 91-285, de 22 de junio de 1970, ha establecido que no puede negarse o restringirse el derecho de sufragio a ningún ciudadano por causa de su raza o color, ni puede negársele la participación en ninguna elección de carácter federal, estatal o local con el pretexto de no haber cumplido con un examen o requisito en ningún Estado de la Unión. Con arreglo a la Ley 89-110, de igual fecha que la anterior, se estableció que ningún ciudadano de los Estados Unidos calificado para votar en cualquier elección para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación, será impedido de votar porque haya dejado de cumplir con un determinado requisito de residencia en cualquiera de los Estados del país. La misma ley declara la prohibición de negar el derecho al voto a los ciudadanos de los Estados Unidos con dieciocho o más años de edad, cuando se trata de elecciones nacionales.

Brasil, con fecha 26 de mayo de 1970, ha dictado la Ley Nº 5.581, que establece normas en materia de realización de elecciones, para ser aplicadas en 1970. Con esta ley se inicia el proceso de reestructuración de los órganos legislativos, a través de una amplia consulta al pueblo, cuya participación se garantiza en el acto mismo de la formación de las listas de candidatos.

9. Derecho de reunión

Colombia, por Decreto Nº 1355, de 4 de agosto de 1970, establece medidas reglamentarias sobre el derecho de reunión, en los Artículos 102 al 107 (Capítulo II del Decreto). El Artículo 102 dispone que "toda persona puede reunirse con otras o desfilar en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin lícito".

Estados Unidos de América registra un fallo de la Corte Suprema en esta materia, en el

caso Gregory et al v. City of Chicago (394 US 111) relativo a la conducta de los manifestantes que, en actitud pacífica, marchaban en favor de los derechos civiles y a quienes la policía de Chicago arrestó por su negativa a dispersarse. Consideró la Corte Suprema que una marcha pacífica y ordenada como ésta, caía dentro de la esfera de actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución. La Corte determinó que las personas afectadas habían sido juzgadas y sentenciadas por el tribunal inferior, por llevar a cabo una manifestación y no por desobedecer a un oficial de la policía. Por consiguiente, la sentencia fue revocada. Otro caso similar fue el Shuttlesworth v. City of Birmingham (394 US 147). Este caso envuelve una ordenanza municipal que reglamenta la participación en desfiles por las calles. Algunas de las personas de la raza negra que participaron en una marcha ordenada en favor de los derechos civiles habían sido arrestadas por violar dicha ordenanza. La Corte consideró que la ordenanza había sido tan amplia en su texto que su interpretación había servido para negar o limitar injustificadamente los derechos consagrados en la Primera Enmienda. Hizo hincapié en el hecho de que protestar o marchar son actos que pueden constituir formas de expresión, a los que da derecho la Primera Enmienda constitucional, y que el uso de las calles para tales fines, aunque puede ser objeto de reglamentos, no puede negarse del todo.

10. Derecho a proceso regular y tratamiento penal adecuado

Uruguay, por Decreto Nº 367/970 creó una Comisión Honoraria Asesora, encargada de re-examinar el régimen jurídico vigente y las medidas aplicables en materia de represión del delito y del tratamiento del delincuente. La Comisión, integrada por 7 miembros, tendría a su cargo, además de la misión aludida, la de estructurar “un programa de política criminal que enfoque la prevención, represión y tratamiento de la delincuencia sobre bases científicas”. Asimismo se advierte, del primer “Considerando” del Decreto, que se trata de una valoración del vigente aparato jurídico uruguayo y sus mecanismos, a los fines de saber si es actualmente adecuado o es insuficiente “para evitar la alteración de las condiciones que aseguren la normal convivencia en sociedad”.

11. Alcance de los derechos humanos

Estados Unidos de América, por sentencia de la Corte Suprema en el caso Rowan v. U.S. Post Office Department (90 S.G. 791 de 1970), ha contribuido a fijar la extensión de la regla según la cual el disfrute de los derechos individuales está limitado por el deber de respetar el derecho ajeno. En el caso citado se ha decidido, interpretando el contenido de la Primera Enmienda a la Constitución, que un vendedor no tiene derecho, de acuerdo con la Constitución, ni de acuerdo con otra ley de los Estados Unidos, a enviar material no solicitado al domicilio de otra persona.

[[Índice](#) | [Anterior](#) | [Próximo](#)]



COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Organización de los Estados Americanos

PARTE II

RELACIÓN DE LOS CAMPOS EN LOS CUALES HAN DE TOMARSE MEDIDAS PARA DAR MAYOR VIGENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS

En diversos países del Continente se vienen produciendo con frecuencia alarmante, actos de violencia que representan graves atentados contra los derechos esenciales del hombre.

La forma más ostensible de dicha violencia tiene como expresión el terrorismo, delincuencia masiva que tiende a instaurar un clima de inseguridad y angustia, con el pretexto de conquistar más altos niveles de justicia social en favor de las clases menos favorecidas.

El mantenimiento y la consolidación de un sistema de libertad personal y de justicia social en el Hemisferio exigen, en los momentos actuales, a juicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se omita esfuerzo alguno en la adopción de medidas para proteger contra el terrorismo el derecho a la vida, que es la base y sustento de todos los demás derechos, el derecho a la libertad personal, vulnerado con frecuentes secuestros y detenciones arbitrarias, y el derecho a la integridad, afectado con torturas y tratamientos crueles.

Considera la Comisión que deben, asimismo, tomarse medidas apropiadas para acelerar los procedimientos penales y obtener el juzgamiento de las personas acusadas sin dilaciones injustificadas y mejorar los sistemas penales, a fin de que las prisiones cumplan sus fines de readaptación y no se inflijan tratamientos inhumanos o degradantes a los detenidos.

Tiene el sentido de una urgente necesidad la intensificación de medidas legales y administrativas para abolir la discriminación racial, allí donde ella todavía subsiste, eliminando las causas económicas, sociales y culturales que la originan.

Juzga la Comisión que, en orden a la vigencia del principio de igualdad, la incorporación creciente de la mujer a las distintas actividades sociales exige que alcance plenitud en el principio de igualdad de remuneración con el varón en caso de labores iguales.

En el campo de la libertad, considera la CIDH la necesidad de eliminar toda clase de restricciones a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, sin perjuicio de un régimen jurídico de responsabilidad por los abusos.

Pero las medidas destinadas a la mayor vigencia de los derechos mencionados serían ineficaces, si no se dedica el máximo esfuerzo al logro de las metas básicas destinadas a acelerar el desarrollo económico y social, como resulta de los Artículos 31 y 43 de la Carta de la Organización, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

En este campo, y en orden a la protección de los derechos humanos, la Comisión hace especial énfasis en la necesidad de dedicar todos los medios para que toda persona tenga acceso a la educación, como lo prescribe el Artículo XII de la Declaración, y para eliminar el

analfabetismo que, en vez de decrecer en este Continente, ha aumentado dolorosamente en los últimos años.

En el campo de los derechos económicos y sociales, considera la Comisión que es también de apremiante urgencia la aceleración de los procesos de reforma agraria inspirados en el Artículo 23 de la Declaración Americana, y el progreso de todas las medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, al vestido, la vivienda y la asistencia médica.

[[Índice](#) | [Anterior](#) | [Próximo](#)]



COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Organización de los Estados Americanos

PARTE III

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN

A. Observaciones respecto de comunicaciones recibidas

En el período de tiempo cubierto por este Informe, la Comisión consideró 217 comunicaciones o reclamaciones de personas y entidades en las cuales se denunciaban 103 casos concretos de presuntas violaciones de los derechos humanos. Además, recibió numerosas comunicaciones de carácter informativo sobre la situación general de tales derechos.

Concluida la tramitación de cada caso, la Comisión entró a examinar las pruebas suministradas por el Gobierno aludido o por el denunciante o las que la propia Comisión pudo recoger de conformidad con el Artículo 50 del Reglamento, aplicando, cuando fuere del caso, la regla de presunción de verdad contenida en el Artículo 51.

Consideró la Comisión que, en su informe anual a la Asamblea General, corresponde hacer recomendaciones solamente sobre los casos cuya tramitación y examen hayan sido concluidos en el período cubierto por el informe y en los cuales se haya comprobado desconocimiento de los derechos humanos. Para simple información, la Secretaría de la Comisión ha elaborado una relación estadística de todas las comunicaciones recibidas (Anexo).

Así, cumpliendo lo prescrito en la Resolución XXII de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria (apartado 4) y en la Carta de la OEA (Artículo 150), la Comisión somete a la consideración de la Asamblea General las observaciones que considera apropiadas respecto de los casos que llenan las condiciones arriba mencionadas.

1. Cuba

La Comisión aprobó, en mayo de 1963 y en abril de 1967, dos informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, los cuales fueron transmitidos a los Gobiernos de los Estados miembros por intermedio de sus Representantes en el Consejo de la Organización.¹ Ambos Informes recogen los antecedentes de la actuación de la Comisión respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba y una relación de las denuncias y testimonios recibidos sobre violaciones de los derechos humanos en ese país.

A partir de la publicación de estos Informes hasta fines del año 1970, la Comisión ha seguido recibiendo comunicaciones o reclamaciones en las cuales se denuncian actos violatorios de los derechos humanos en Cuba. En la gran mayoría de estas denuncias se hace referencia a las condiciones en que se encuentran recluidos los presos políticos, así como a los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que son sometidos.

La Comisión, en varias oportunidades, se dirigió al Gobierno de Cuba, en solicitud de

información sobre los nuevos hechos denunciados o de autorización para visitar el territorio cubano. Ante el silencio de las autoridades cubanas y en virtud de lo que dispone el Artículo 51, párrafo 1, del Reglamento, la Comisión, en base a los hechos denunciados y otros elementos de prueba que obran en su poder. Ha llegado, en su Vigésimoquinto Período de Sesiones, a las siguientes conclusiones:

I. Que en Cuba numerosas personas, inclusive mujeres y menores, han sido encarceladas por motivos políticos o privadas de la vida, sin juicio previo o luego de juicios en los cuales los acusados no gozaron de las garantías del debido proceso.

II. Que la situación de los presos políticos en Cuba, condenados a penas de privación de libertad, luego de haber sido detenidos arbitrariamente y sometidos a juicios, en los que tampoco se observaron las garantías del debido proceso, continúa revistiendo caracteres incompatibles con los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Declaraciones Americana y Universal de los Derechos Humanos.

III. Que corresponde observar severamente al Gobierno de Cuba por las reiteradas violaciones de derechos humanos que le son imputables, así como por el mantenimiento de condiciones ya denunciadas por esta Comisión como gravemente lesivas de tales derechos.

2. Haití

La situación de los derechos humanos en Haití ha sido objeto de amplia consideración e intensa preocupación por parte de la Comisión, según consta en tres informes publicados en 1963, 1967 y 1969, este último dentro del período de tiempo a que se refiere el presente Informe.²

Posteriormente, la Comisión ha recibido nuevas comunicaciones sobre alegadas violaciones de los derechos humanos en dicho país.

No obstante la gravedad de las observaciones contenidas en los informes a que hemos hecho referencia, no se ha registrado ningún cambio en la actitud del Gobierno de Haití en relación a los derechos humanos y a la protección que está en el deber de extender sobre ellos.

Por lo demás, en una posición que no se concilia con el contenido de las normas que regulan el funcionamiento de nuestra Organización regional y de esta Comisión, el Gobierno de Haití insiste en calificar como casos de intervención en sus asuntos internos, pedidos de información que le han sido dirigidos de conformidad con los términos del Estatuto y del Reglamento que nos rigen.

Por consecuencia de estos hechos, la Comisión, en su Vigésimoquinto Período de Sesiones, ha considerado necesario pedir:

1. Que se recomiende al Gobierno de Haití que atienda las observaciones contenidas en los Informes de esta Comisión antes citados, previniendo nuevas violaciones, reparando adecuadamente a las víctimas por la lesión que ellas han sufrido en sus derechos fundamentales y sancionando a los funcionarios responsables de tales excesos.

2. Que se observe a dicho Gobierno en cuanto califica como actos de intervención en sus asuntos internos los pedidos de informe que le dirige esta Comisión de conformidad con su Estatuto y su Reglamento.

3. El Salvador y Honduras

El 25 de junio de 1969, el Gobierno de la República de El Salvador solicitó que la Comisión o una Subcomisión se constituyera en el territorio de ese país a fin de constatar diversos hechos violatorios de los derechos humanos perpetrados contra nacionales salvadoreños en Honduras, así como la expulsión masiva de ciudadanos salvadoreños de este último país.

En la propia fecha el Gobierno de la República de Honduras elevó a la Comisión denuncia por actos violatorios de los derechos humanos, cometidos por sectores de la población salvadoreña en perjuicio de nacionales hondureños que se habían trasladado a El Salvador con el objeto de asistir a la celebración de un evento deportivo. El Gobierno hondureño solicitó, también, la presencia de la Comisión en su territorio, a fin de constatar los hechos denunciados.

En vista de la urgencia de la situación, la Comisión designó una Subcomisión para que se trasladara a ambos países, a fin de examinar en el terreno la situación de los derechos humanos.

Entre el 4 y el 10 de julio de 1969, la Subcomisión visitó ambos países en donde sostuvo entrevistas con las autoridades respectivas, recibió testimonios de particulares y denuncias de los propios Gobiernos sobre la situación de los derechos humanos.

El día 14 de julio se iniciaron las hostilidades entre las Repúblicas de El Salvador y Honduras que determinó que el Consejo de la Organización, actuando provisionalmente como Órgano de Consulta, convocara en Resolución de 22 de julio de 1969, a la Decimatercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Atendiendo a una solicitud del Gobierno de El Salvador y de otros Gobiernos americanos, el Informe Preliminar de la Subcomisión fue transmitido a la Reunión de Consulta el 23 de julio de 1969 por intermedio del señor Secretario General de la Organización.³

El 25 de julio, el Gobierno de Honduras denunció violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por el Gobierno de El Salvador en las poblaciones hondureñas ocupadas por el ejército salvadoreño. En esta oportunidad el Gobierno de Honduras solicitó que la Comisión se constituyera en su territorio, a fin de constatar tales denuncias.

La Comisión, reunida en un período extraordinario de sesiones entre el 5 y el 7 de agosto de 1969, aprobó una Resolución que, en su parte dispositiva, establece:

1. Recomendar a los Gobiernos de El Salvador y Honduras que requieran de la prensa y de la radiodifusión el cese de toda propaganda que induzca a actos de persecución, o que genere el temor de que tales actos puedan producirse. En el caso de que espontáneamente tales medios de comunicación no cesen en su propaganda estimulante del desorden, uno y otro Gobierno habrán de adoptar las medidas conducentes a ese fin que sean autorizadas por las disposiciones constitucionales que los rijan.

2. Recomendar al Gobierno de Honduras que ordene una investigación acerca de las responsabilidades que incumban a las autoridades, sea por actos positivos o por omisión, en las violaciones contra residentes salvadoreños, que han determinado el éxodo de millares de ellos.

3. Recomendar al Gobierno de El Salvador que ordene una investigación acerca de las responsabilidades que incumban a las autoridades, sea por actos positivos o por omisión, en los actos de violencia contra visitantes hondureños y de agravio contra los símbolos nacionales de Honduras, ocurridos entre el 14 y el 16 de junio de 1969.

4. Hacer saber a los Gobiernos de Honduras y El Salvador que los hechos que han determinado la actuación de la Subcomisión configuran graves violaciones de los derechos

humanos; y solicitar de estos Gobiernos que adopten todas las medidas necesarias, a fin de asegurar remedios efectivos para reparar tales violaciones, así como adecuada protección contra violaciones futuras de los derechos humanos.

Finalmente, en el Vigésimotercer Período de Sesiones, entre el 6 y el 16 de abril de 1970, la Comisión decidió que los hechos que le habían sido denunciados a la Subcomisión, tanto en Honduras como en El Salvador, configuraban graves violaciones de los derechos humanos, particularmente de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas, de protección contra la detención arbitraria, de propiedad y de residencia y tránsito. Por otra parte, observó que los Gobiernos de Honduras y El Salvador no habían adoptado todas las medidas necesarias, a fin de reparar tales violaciones, al tenor de lo recomendado por la Comisión en su Resolución de 7 de agosto de 1969.⁴

La Comisión espera y confía que no haya más dilación en el cumplimiento de las recomendaciones que ha formulado a los Gobiernos de los dos países en conflicto, pues ambos deben estar convencidos de que tal cumplimiento, a más de resolver la situación pasada, será el medio más eficaz de prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en el futuro.

B. Recomendaciones fundadas en la experiencia de la Comisión

Además de las recomendaciones que anteceden, fundadas en los resultados a que ha llegado la Comisión en el examen de determinadas quejas o denuncias, consideramos oportuno formular otras, derivadas de la experiencia adquirida en el cumplimiento de nuestras tareas. Creemos que, en el caso de ser atendidas, se acrecentará la eficiencia de nuestra labor, con ventajas para la causa en la que todos estamos empeñados.

En tal sentido, nos permitimos proponer:

1. Que se recomiende a todos los Gobiernos que, dentro de lo posible, se sirvan absolver en breve plazo los pedidos de informes que les curse la Comisión de conformidad con el Artículo 42 del Reglamento. Un examen de los expedientes tramitados y de los que están pendientes de resolución pondría en evidencia las dificultades con las que ha chocado en muchos casos la Comisión por la demora en la obtención de estos informes. La Comisión desearía no tener que recurrir en ningún caso a la facultad que le concede el Artículo 51 de su Reglamento, de presumir verdaderos los hechos cuando la información solicitada no fuere suministrada dentro de los ciento ochenta días. Por lo demás, hay casos en los cuales la demora de una información durante ciento ochenta días torna ineficaz la acción que pueda desarrollar la Comisión.

2. Que se recomiende a todos los Gobiernos que, dados los altos fines que inspiran la labor que nos ha sido encomendada, se facilite la observación de los hechos, dentro de sus propios territorios, cuando sea del caso y la Comisión así lo solicite de acuerdo con el Artículo 50 de su Reglamento. Atravesamos por una época erizada de dificultades, en la cual en muchos casos solamente la presencia de miembros de la Comisión en el terreno de los hechos, según lo ha demostrado la experiencia, permite descartar maliciosas denuncias, ajustar otras a sus debidas proporciones y, en todo caso, obtener las bases de hecho indispensables para fundar conclusiones justas.

3. Que se recomiende a todos los Gobiernos la adopción de medidas destinadas a la difusión y el conocimiento de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos, así como del material de estudio y divulgación que la Comisión elabora. Tan grave como la crisis en que los derechos humanos se encuentran en el Hemisferio es la ignorancia de muchos millones de hombres y mujeres americanos acerca del contenido y límites de tales derechos y de los medios que el Derecho interno y el Derecho Internacional ofrecen para su adecuada protección. La Comisión Interamericana hace cuanto está a su alcance para contribuir a superar esas carencias, ya sea preparando estudios acerca de los diferentes derechos humanos con destino a colegios, universidades, etc.,⁵ ya sea editando cartillas o manuales

para ser distribuidas en escuelas, institutos de enseñanza secundaria, sindicatos, asociaciones de profesionales, etc.⁶ Pero es indudable que los recursos de que se dispone no permiten dar a tales trabajos la difusión que sería conveniente que ellos alcanzaran. La ayuda de los Gobiernos para estos fines sería de la más alta importancia, especialmente en cuanto a la inclusión de cursos o cursillos,, a todos los niveles de la educación pública, acerca de los derechos humanos y de su defensa. También motivos de orden económico han obligado a postergar otro tipo de trabajos de divulgación, tales como la preparación de programas acerca de los derechos humanos y de los medios para su defensa, destinados a ser difundidos por medio de la radio y la televisión. La creación de Comisiones Nacionales sobre derechos humanos es otro objetivo que la Comisión Interamericana se ha propuesto alcanzar, cifrando grandes esperanzas en los resultados que puedan ser obtenidos.

4. Que se recomiende a todos los Gobiernos que suministren a la Comisión las informaciones que les sean requeridas, en conformidad con el Estatuto y el Reglamento, para poder elaborar el Informe Anual, especialmente en cuanto a los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos señalados por la Declaración Americana. Resulta sumamente difícil para la Comisión, no obstante el esfuerzo cumplido por sus funcionarios, suplir la falta de información directa de los Gobiernos acerca de las nuevas normas constitucionales, legales o administrativas, o de los nuevos fallos judiciales dictados en sus respectivos Estados, que importen avances en la lucha por la consolidación de los derechos humanos en América. Interesa especialmente a la Comisión conocer toda medida dirigida a sancionar la violación de derechos humanos, a proteger a los individuos contra actos indebidos o inhumanos en las prisiones o cometidos por los cuerpos de custodia o vigilancia, a garantizar el uso de los recursos legales contra las violaciones de derechos humanos o a implantar normas que satisfagan las exigencias de justicia social. El inexcusable deber de informar acerca de estos extremos, impuesto a la Comisión por el Artículo 9 (bis) de su Estatuto, la coloca, por falta de documentación suministrada por los Gobiernos, en la penosa situación de ofrecer un panorama incompleto en esta materia, incurriendo en omisiones que, no por involuntarias, son para ella menos molestas. Anualmente, la Comisión requerirá de todos los Gobiernos el envío de esta información indispensable, la cual es utilísimo divulgar, por cuanto la labor realizada por cada Estado puede servir de inspiración o modelo a los demás. La Comisión expresa desde ahora su vivo reconocimiento por la atención que se preste a sus pedidos de información.

5. Que se recomiende a todos los Gobiernos, como una forma efectiva de hacer progresar la vigencia de los derechos humanos en este Hemisferio, la pronta ratificación de la Convención aprobada en la Conferencia de Plenipotenciarios de San José de Costa Rica. Este instrumento, al conferir carácter convencional a las normas que definen los derechos humanos y al perfeccionar la organización de esta Comisión y crear la Corte, representa el más sustancial avance que se haya registrado en la historia de nuestra Organización regional para la estructuración de un sistema jurídico adecuado de defensa de la persona humana y de sus libertades fundamentales.

Pero la recomendación final que nuestra Comisión desearía fuere formulada por la Asamblea, es en el sentido de que todos los Gobiernos consideren la adopción de medidas que fortalezcan la condición económica de los pueblos.

Abrigamos la convicción de que un vigoroso desarrollo de nuestras economías nacionales, fundado en una justa cooperación internacional y en un intercambio equitativo de nuestros productos, es la base indispensable para la sólida construcción de una comunidad americana integrada por hombres y mujeres libres de temor, de miseria y de opresión.

[[Índice](#) | [Anterior](#) | [Próximo](#)]

1 Informe sobre la Situación de los Presos Políticos y sus Familiares en Cuba (OEA/Ser.L/V/II.7, Doc. 4) e Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba (OEA/Ser.L/V/II.17, Doc. 4, Rev.).

2 OEA/Ser.L/V/II.8, Doc. 5 de 19 de noviembre de 1963; OEA/Ser.L/V/II.16, Doc. 2 Rev. de 16 de febrero de 1967; OEA/Ser.L/V/II.19, Doc. 6 Rev. de 18 de abril de 1968.

3 Informe Preliminar de la Subcomisión sobre Violaciones de los Derechos Humanos en Honduras y El

Salvador (OEA/Ser.L/V/II.22, Doc. 2 de 15 de julio de 1969, Reservado).

⁴ OEA/Ser.L/V/II.23, Doc. 9.

⁵ El derecho de petición (OEA/Ser.L/V/II.24, Doc. 10); Primer informe acerca de la libertad sindical (OEA/Ser.L/V/II.24, Doc. 2).

⁶ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Qué es y cómo funciona? (Secretaría General OEA, 1970); Manual de Normas Vigentes en Materia de Derechos Humanos (OEA/Ser.L/V/II.23, Doc. 21).



COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Organización de los Estados Americanos

ANEXO

COMUNICACIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTES A 1969-1970

CUADRO I

NÚMERO DE COMUNICACIONES RECIBIDAS EN 1969-1970

1969	-	153 comunicaciones referentes a 77 casos concretos
1970	-	64 comunicaciones referentes a 26 casos concretos

Total comunicaciones: 217

Total casos concretos: 103

CUADRO II

COMUNICACIONES Y CASOS POR PAÍSES

País	Nº de Comunicaciones	Nº de Casos Concretos
Argentina	10	9
Barbados	0	0
Bolivia	1	1
Brasil	40	9
Colombia	1	1
Costa Rica	0	0
Cuba	33	7
Chile	1	1
Ecuador	2	2
El Salvador	12	12*
Estados Unidos de América	4	4
Guatemala	0	0
Haití	2	2
Honduras	43	40**
Jamaica	0	0
México	5	3
Nicaragua	5	5
Panamá	7	2

Paraguay	3	3
Perú	1	1
República Dominicana	0	0
Trinidad y Tobago	0	0
Uruguay	1	1***
Venezuela	0	0

* Esta cifra incluye 8 casos concretos transmitidos al Gobierno de El Salvador por la Subcomisión Interamericana de Derechos Humanos, en San Salvador, el 29 de agosto de 1969.

** Esta cifra incluye 37 casos concretos transmitidos al Gobierno de Honduras por la Subcomisión Interamericana de Derechos Humanos, en Tegucigalpa, el 27 de agosto de 1969.

*** Transmitida al Gobierno del Uruguay por razones humanitarias. No se clasificó como reclamación.

CUADRO III

ESTADO DE LOS CASOS RECIBIDOS

1.	Transmitidos a los Gobiernos:	66
2.	Transmitidos al Consejo de la OEA:	1
3.	Transmitidos a las Naciones Unidas:	1
4.	Archivados sin perjuicio:	2
5.	Archivados:	8
6.	Casos en que se solicitó complementación de la denuncia de los quejosos:	32
a)	sin respuesta:	17
b)	con respuesta:	15
	TOTAL:	103
		===

CUADRO IV

ESTADO DE LOS CASOS TRANSMITIDOS A LOS GOBIERNOS

Número de casos transmitidos

66

A) Con respuesta:

1.	Transmitidos por motivos humanitarios:	1
2.	Declarados improcedentes:	4
3.	Reiterados a los gobiernos respectivos, solicitando mayor información:	3
4.	Archivados sin perjuicio:	1
5.	Trasladados a los reclamantes solicitándoles mayor información:	2
6.	En trámite	4
		15

B. Sin respuesta:

1.	Transcurridos los ciento ochenta días del Art. 51 del Reglamento para que los gobiernos respectivos suministren la información solicitada:	49*
2.	Archivados sin perjuicio:	1
3.	Archivados: 1 <u>51</u> —	

TOTAL:	66	66
	==	==

2841-46-E

* Incluye las comunicaciones transmitidas a los Gobiernos de El Salvador y Honduras.

[[Índice](#) | [Anterior](#)]